

tucional de Hamilton-Fuentealba, la definió como un intento «que anularía las conquistas alcanzadas en el campo del área social de la economía» y que «detrás de esta actitud apunta inclusive la amenaza de destituir al Presidente de la República. No me inquieta, no me inquieta en lo personal este hecho. Me preocupa porque es mi obligación defender la Constitución». Y agregó: «Lo único que me inquieta es que se barrerán las bases de la constitucionalidad chilena, que se quiere cambiar el juego y que se quiere, por lo tanto, precipitar a este país a una lucha muy dura y muy profunda». Para enseguida señalar sus «obligaciones» como Presidente, cuya enumeración desconcertó a los trabajadores que lo escuchaban:

«Es mi obligación, y la voy a cumplir, defender los preceptos constitucionales.

»Es mi obligación evitar el enfrentamiento.

»Es mi obligación rechazar toda violencia, física, económica y social.

»Es mi obligación impedir que haya un baño de sangre en Chile.

»Es mi obligación defender las conquistas de los trabajadores y la Revolución chilena.»

Pero ocurre que, cotidianamente, para los trabajadores que escuchaban a Allende, la idea de «defender los preceptos constitucionales» era una traba para ellos mismos, para su organización naciente, para impedir el sabotaje, los atentados, el mercado negro, la especulación y el abuso de los monopolistas que, a través de sus bandas fascistas adiestradas por personal de las Fuerzas Armadas, hacían día a día contra todo el aparato económico de la nación. Y los jueces, el Parlamento, la letra de las leyes y los «preceptos constitucionales» servían para defender a los saboteadores y entorpecer la labor de vigilancia y aumento de la producción de los trabajadores.

### *Avanzar o no avanzar*

Mientras por un lado el presidente Allende decía en sus discursos que el pueblo debía organizarse en Juntas de Abastecimientos y Precios, Consejos Comunales Campesinos, Comités de Producción, Comités de Vigilancia de la Producción, etc., para «defender la Revolución»; por otro, los trabajadores veían como, a través del control de esos organismos por parte de las

directivas políticas de los partidos de la Unidad Popular, se transformaban en organizaciones para paralizar la movilización de las masas, para impedirles que se prepararan para el verdadero enfrentamiento que se veía venir: el pueblo con las Fuerzas Armadas de la burguesía y del imperialismo.

En el seno del Gobierno, había una discusión profunda al respecto. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic (independiente de izquierda hasta ese momento, y miembro del partido socialista a partir de 1973), planteaba, como lo escribiera más tarde en un documento publicado por «Revista de la Universidad Técnica del Estado», que el meollo de las dificultades estaba «en todo lo que significa el carácter de clase del Estado burgués, dentro de cuyas características todavía vigentes han venido encauzándose las nuevas realizaciones. Toda su estructura, incluso su reflejo en el marco jurídico y hasta en la organización del aparato administrativo, se había configurado para atender a los intereses del capitalismo y la dependencia, preservar el dominio monopólico y excluir cualquier forma de acceso y participación de los trabajadores. Con ello chocan las nuevas exigencias, esterilizando gran parte de los esfuerzos y agudizando una contradicción que *sólo podrá resolverse mediante la sustitución de ese Estado burgués por la construcción de un Estado de otro carácter, de un Estado Popular*; la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del área social, a través de su presencia decisoria en los Consejos de Administración y otros mecanismos; las formas recién iniciadas de extensión de esa presencia a los diferentes niveles de decisión administrativa; las formas todavía en germen de su control sobre el área privada; la organización de los trabajadores y el pueblo en las Juntas de Abastecimientos y Precios, para ejercer un mayor control sobre el proceso de distribución; los organismos comunales, los «cordones industriales» y muchas otras iniciativas, algunas de ellas multiplicadas en la respuesta de los trabajadores a la ofensiva reaccionaria de octubre; todas ellas constituyen otras tantas manifestaciones en esa dirección, que corresponde *profundizar y ampliar urgentemente, tanto para asegurar el carácter del proceso revolucionario como para asegurar los problemas inmediatos*».

Vuskovic planteaba (y con él una minoría de las directivas del partido socialista y el MAPU) que la única forma de impedir el colapso cuando la burguesía y el imperialismo recurrieran a «su reserva estratégica de dominio» (las Fuerzas Arma-

das) era crear «una gigantesca movilización de masas con objetivos concretos de controlar el aparato productivo y prepararse para el enfrentamiento militar entre las clases».

Y formulaba teóricamente su tesis diciendo:

«En este período, los avances en la realización del programa han sido suficientemente grandes como para motivar la más enconada reacción del imperialismo y la burguesía, pero todavía insuficientes como para privar a la burguesía nacional de la posibilidad de utilizar el poder económico que conserva en toda suerte de acciones de obstrucción y sabotaje a la economía. Ello quiere decir, entre otras cosas, que la conducción económica no se realiza en un plano de dominio político que permita concentrar la preocupación en las tareas constructivas. Por el contrario, en ella se expresa toda una lucha política no resuelta, que convierte las acciones económicas en instrumentos de esa misma lucha. De ahí que en cada problema económico que hoy se afronta no sea difícil identificar la acción deliberada del imperialismo y la burguesía».

Con mayor precisión, Vuskovic decía que la burguesía se había propuesto la tarea de hacer fracasar la política económica del Gobierno, para quitarle apoyo popular primero y derrocarlo después, porque «a pesar del número de empresas incorporadas al área social, de la estatización de los bancos y de la extensión de la reforma agraria la burguesía sigue detentando un poder económico suficientemente importante como para proponerse esta tarea con algunas posibilidades de triunfo».

Y especificaba: «Se trata, en primer lugar, de que aún no se completa el área de propiedad social en los términos previstos. Importantes actividades monopólicas o estratégicas continúan en manos de sus propietarios capitalistas, constituyendo una fuente de cuantiosos ingresos y un instrumento de dominio sobre otras empresas. En segundo lugar, el área social no ha llegado a constituirse en el sector efectivamente dominante, capaz de imponer los términos de funcionamiento y de situar en un marco general de decisiones la gestión de las empresas que, de acuerdo al programa, continúan y continuarán integrando el área privada de la economía. Tampoco se concretan en ésta, formas efectivas de control por parte de los trabajadores... En tercer lugar, no se ha logrado imponer de modo definitivo una redistribución real del ingreso en favor de los trabajadores y del proceso de acumulación».

Con estos planteamientos, el entonces ministro de Econo-

mía Pedro Vuskovic, pretendió convencer a Salvador Allende y a su principal apoyo, la directiva del Partido Comunista de Chile, de la necesidad imperiosa de «dar un salto adelante» basándose en una «gigantesca ofensiva de masas», aprovechando que «todavía las fuerzas reaccionarias y su aparato armado del Estado burgués no tienen la cohesión suficiente como para intentar una contrarrevolución armada». Si no lo hacemos ahora, se completaba la tesis, después será tarde, y la crisis económica servirá de pretexto para la insurrección armada de la burguesía y el imperialismo.

Pero, contra Vuskovic estaba el planteamiento de la directiva del partido comunista, a través de Orlando Millas y Luis Corvalán, quienes plantearon que «eso no se puede hacer. Nuestra tarea ahora es impedir que se provoque a los enemigos». De acuerdo con el presidente Allende, estimaron que era bueno «tomar en cuenta los argumentos del generalato de Santiago», que «nos han hecho saber (en mayo de 1972) que están muy preocupados por el aumento exagerado de la inflación, el desorden con que algunos trabajadores de la ciudad y el campo ocupan empresas, y la baja producción en el área privada».

El 17 de junio, el presidente Allende cambió sus ministros. Los dos hechos más destacados: la salida del ministro de Minería, general de brigada Pedro Palacios Camerón; y la del ministro de Economía, Pedro Vuskovic.

El general Palacios Camerón fue retirado del ministerio por acuerdo de los generales de la guarnición de Santiago, que estimaron, por imposición del grupo de los «duros» en combinación con los «reformistas», que «no podemos permitir un miembro de las Fuerzas Armadas en el Ministerio, cuando sabemos que el nuevo Gabinete será dominado por los comunistas «esto es una mala imagen para nuestros institutos armados, que son antimarxistas por doctrina y fundamento».

El ministro Pedro Vuskovic salió porque el partido comunista exigió el control completo de la parte económica del Gabinete para aplicar su política «de convivencia nacional». A través de Orlando Millas, que sería sucesivamente ministro de Hacienda y de Economía, la bandera del nuevo «muñequero» de Salvador Allende se resumiría en las siguientes palabras: «Para avanzar hacia el socialismo, así como más adelante para construir el socialismo, lo que debe estar en primer lugar es el desarrollo de la producción en todos los campos de la economía nacional. Nada hay sin ello».

La directiva del Partido Comunista de Chile y Salvador Allende, habían impuesto la tesis de congelar el proceso bajo el lema de «consolidar lo que tenemos, primero, para después avanzar». Pero ocurría que lo «que tenemos» era lo que definía Vuskovic: un poder económico sustancial en la burguesía, un área social de la economía inocua para poder impedir el sabotaje de la producción por parte de los enemigos del Gobierno, unas Fuerzas Armadas en constante preparación para «el asalto final al Poder» y una clase trabajadora frenada en sus ímpetus revolucionarios, desarticulada a diario por todos esos factores combinados y objeto de una relativamente exitosa campaña de propaganda de la oligarquía y el imperialismo.

### *Nuevo complot militar*

Las fuerzas políticas, parlamentarias, judiciales y gremiales desatadas por la ofensiva planificada por la Sociedad de Fomento Fabril para llegar a la meta de derrocar «legalmente» a Salvador Allende, habían comenzado a recibir desde muy temprano el apoyo de los organismos controlados por la Agencia Central de Inteligencia en Chile. Esta ayuda no sólo procedía de los *items* «gastos varios», «gastos de representación» o «propaganda» de las grandes empresas monopólicas chilenas, sino también de empresas multinacionales como la ITT (que en mayo de 1972 fue requisada por el Gobierno por fraude tributario y por haber participado abiertamente en la conspiración de septiembre-octubre de 1970), la Anaconda y la Kennecott (que habían declarado una verdadera guerra contra el Gobierno de Allende, incluyendo el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, como comenzó a ocurrir a partir del 30 de septiembre de 1972 en Europa).

El esquema del «golpe legal» civil consistía en provocar el deterioro de la situación económica; la acción psicológica a través de los medios de comunicación de masas; una labor de penetración en las Fuerzas Armadas; y la preparación de grupos paramilitares para terrorismo de «apoyo» al deterioro económico.

Entre los grupos terroristas fascistas había dos que sobresalían por su organización y financiamiento: Patria y Libertad y Comando de Ex Cadetes. Habían tenido un origen distinto, pero, con el desarrollo de la situación, habían llegado a tener financiamiento, asesoría y adiestramiento común.